

Movimientos sociales y participación política

Luis Miguel Baronetto

Estos aportes son apenas algunos pareceres surgidos de la observación de los procesos sociales vividos; y conversados muy de cerca con tantos y tantas compañeros/as preocupados por encontrar una respuesta a las problemáticas urgentes de los sectores populares. Pero a la vez, para no quedarse en el inmediatismo asistencial, procurando avanzar en respuestas más integrales y profundas capaces de operar sobre las transformaciones necesarias para la dignidad de la vida de las mayorías empobrecidas.

La reflexión sobre **la política, el estado y los movimientos sociales** en los inicios de la segunda década del siglo XXI, en un contexto argentino y latinoamericano de recuperación de la participación popular, llegará a conclusiones – siempre provisionarias, - diferentes de las ideas hegemónicas de hace cuarenta años, cuando abundaban en nuestras tie-

rras ansiosas de justicia, los esfuerzos organizativos y las ideas revolucionarias de cambios sociales. Pero también serán distintas a las reflexiones que se impusieron y predominaron en los sectores populares después del terrible y catastrófico vendaval del neoliberalismo en Latinoamérica, con sus tiempos de dictaduras genocidas y de democracias restringidas.

La privatización de la política

Se habla a menudo de “políticas públicas”, pero en general todas las políticas debieran ser públicas. Cuando se acentúa lo público en realidad se quiere introducir un concepto que amplía la idea de política y de democracia, en relación a lo que ha predominado hasta hace poco. La privatización de la política que el neoliberalismo impuso desde lo público, en el ejercicio del poder del estado, justifica que pongamos el

acento en el destino popular de la política. **Lo “público” aquí tiene un sentido de oposición a un modo de acción política “privada” del estado restringida a ciertos intereses hegemónicos, esencialmente de carácter anti-popular.** Pretende afirmar una responsabilidad inclusiva. Es decir, la política - como instrumento para el manejo del estado - debe desarrollar su acción atendiendo el interés y las necesidades de todos y todas, para contenerlos y armonizarlos, aún cuando resulten contrapuestos o contradictorios. Pero su esfuerzo principal y sus recursos deben estar dirigidos en forma prioritaria a los que no pueden sostenerse en el escenario por sus propios medios. Este rol compensador y ejecutor de la **justicia social** debe ser la principal razón de ser de lo que entendemos como “políticas públicas”.

Instalar **una reivindicación sectorial como política pública** significa asumirla como prioritaria en la gestión del estado. Esto implica al menos tres aspectos relacionados, que merecen destacarse: - a – incluir la demanda en la planificación y el presupuesto de gobierno, - b – institucionalizar la reivindicación como política de estado, para ser tratada por sus diferentes poderes, - c – con estos pasos, extenderla a la sociedad para que sea asumida como propia por otros sectores. Estos pasos instalarán **la permanencia** de la po-

lítica, que es otra característica de lo que entendemos por “política pública”. Una política de estado no puede ser una medida aislada y esporádica, instrumentada sólo como producto marketinero o para resolver transitoriamente un conflicto.

Movimientos sociales y ONGs

La privatización de la política impulsada por el neoliberalismo, que dismanteló el estado privando a los sectores más necesitados, desocupados y empobrecidos de condiciones mínimas de vida en dignidad, tuvo como consecuencia el **surgimiento de los movimientos sociales** reivindicatorios de necesidades primarias e inmediatas (de comida y trabajo). Así emergió el movimiento piquetero, las ollas populares, las cooperativas, los microemprendimientos, etc. Este nuevo fenómeno social, propio del instinto de preservación de los pueblos, estuvo acompañado por la proliferación de ONGs, que contribuyeron a desarrollar algunas estrategias de supervivencias de los sectores populares. Cáritas, convertida en ONG, aunque siempre fue la institución oficial de la Iglesia Católica para asistir a los pobres, cumplió este rol. Desde el mismo estado se canalizaron recursos a las tareas asistenciales, delegando en estas organizaciones funciones que les eran propias con el evidente propósito de atenuar los efectos sociales; y también contener y desarticular las pro-

testas y estallidos sociales. En general **el discurso de la solidaridad reemplazó al de la justicia social, también como reflejo de la despolitización y el vaciamiento ideológico, que predominó en el reinado neoliberal, de los 90.** Principalmente los jóvenes canalizaron su sensibilidad y vocación solidaria en una militancia social, incorporándose como voluntarios, técnicos o profesionales de esas organizaciones. Era conveniente explotar esta veta solidaria, pero no introducir el eje político de la justicia social, que cuestiona de raíz la existente matriz injusta de distribución!

Las Organizaciones No Gubernamentales (ONGs) se “popularizaron” como un fenómeno propio del período de abandono del estado de sus responsabilidades sociales. Venían a cumplir un rol supletorio, con recursos proporcionados desde organizaciones de solidaridad internacional, pero también de algunos centros financieros como el Banco Mundial. Para estos, eran las migajas necesarias caídas de la mesa para combatir el hambre provocado por las políticas que esos mismos organismos financieros imponían a nuestros países, con sus planes de ajustes, provocando la desocupación, la flexibilidad laboral y las carencias de los derechos elementales de salud, vivienda y educación por el achicamiento del estado.

La valorización y proliferación de las ONGs, coincidió con la agresiva implementación del neoliberalismo en tiempos de la democracia instaurada luego de la dictadura genocida. Su sola denominación como “no gubernamental”, cargaba un contenido político importante. No era una descripción inocente de estas instituciones propias de la sociedad civil. En el contexto político en el que se multiplicaron señalaban una clara diferenciación y hasta oposición a lo estatal. De algo modo se afirmaba que lo que no resuelve el estado (por incapacidad?, por corrupción?, por ineficiencia?...de la política encarnada en sus dirigentes...), la “gente” (no el sujeto popular) lo puede resolver mediante la articulación posibilitada por la ONGs.- No debe olvidarse que esto pudo hacerse, después de los rudos golpes políticos que el terrorismo de estado le aplicó a los sectores más dinámicos del movimiento popular. El discurso sobre los nuevos paradigmas, ciertamente necesarios e imprescindibles para afrontar una realidad transformada, buscó tergiversarse en una despolitización funcional al monopolio de la política y el estado en manos de los grupos económicos-culturales hegemónicos.

El estado ausente, a cargo de la dirigencia política de los partidos tradicionales, que abandonaron sus banderas históricas y se “aggiornaron” al neoliberalismo, provocó no

sólo la apatía de la ciudadanía hacia la activa participación sino un fuerte rechazo deslegitimador de la institucionalidad política. La legítima reacción popular que organizó la solidaridad para la sobrevivencia, a través de emprendimientos autogestionados, acentuó el divorcio con las estructuras políticas y se produjo un distanciamiento del estado por resultar ineficaz en la solución a sus problemas. Esta autonomía surgida de la necesidad y la urgencia de buscar respuestas en otras instituciones como las iglesias, los sindicatos y principalmente en las ONGs, alimentó algunas teorías sobre los nuevos sujetos históricos, que derivaron en la antipolítica. Algunas ONGs que acertadamente alentaron reflexiones sobre la realidad del momento contribuyeron a despertar espacios de participación y experiencias de gestión, aunque siempre en escala menor. Pocas han sido las experiencias que no repitieron en su seno los vicios criticados a los partidos políticos en el manejo interno del poder y las instancias reales de participación en las propias organizaciones populares. Pocos micro emprendimientos pudieron sobrevivir en el marco de lo que se sobredimensionaba como **economía social**. Porque no era posible competir en el libre mercado sin un fuerte apoyo estatal, que de todos modos alentaba esta salida como asistencial y de emergencia.

La direccionalidad de los recursos económicos de las agencias donantes a las ONGs, hasta muy entrada la década de los noventas, priorizando la satisfacción de las mínimas necesidades vitales del propio sustento, la vivienda o una capacitación para sobrellevar esta exclusión social, le impuso límites a las embrionarias organizaciones populares, que se plasmaron en cooperativas de trabajo, de consumo, huertas o comedores comunitarios, y algunas otras. En este marco se desarrolló el concepto de economía social. No fueron pocos los esfuerzos intelectuales por hacer viable esta alternativa a la economía de mercado, que aparecía como el monstruo grande que pisa fuerte, invencible, imposible de abordar desde las orillas de la marginación social. En algunos casos era claro que se planteaba la economía social como instrumento no sólo de sobrevivencia a través de micro emprendimientos, sino para ayudar a mantener cierta capacidad de autoestima, también aniquilada por el neoliberalismo. Y esto merece valorarse. Pero desde una lectura política hay que decir que las limitaciones impuestas por los organismos donantes, transmitidas y asumidas por las ONGs, impidieron a las embrionarias organizaciones populares y nuevos movimientos sociales avanzar en la visualización del problema ideológico y político de fondo que permitiera identificar al sistema capitalista como la causa

originaria de una estructuración social injusta. Objetivamente las ONGs, en general, se limitaron a una restringida capacitación técnica para la sobrevivencia. Y eso impidió una formación crítica a la cultura neoliberal que se iba imponiendo hasta dominar la sensibilidad que motiva muchas de nuestras conductas. No sólo era apartarse del escenario político de la lucha por el poder, sino reemplazar el concepto de exigencia al estado de las necesidades básicas por la obtención de medios que ayudaran a hacer visible la salida a través de la “economía social”. El desarrollo de esta economía podía llegar hasta generarse un círculo reducido para la comercialización de lo producido; o más limitados aún, a ingentes esfuerzos por el elemental sustento familiar. Socialmente los pequeños emprendedores reducían su perspectiva socio-cultural y política al microclima de relaciones para afrontar sus propias, graves y urgentes necesidades inmediatas. Los esfuerzos articuladores y de reflexión alcanzaban hasta “compartir experiencias”. Aún con estas limitaciones, debemos reconocer el aporte de las ONGs que se pusieron al servicio de los nuevos movimientos sociales: trabajadores desocupados, amas de casa pertenecientes a las clases populares, jóvenes sin empleo se instalaron por sus reclamos y movilizaciones como **nuevos sujetos** en la escena política. Jugaron un

rol supletorio en lo asistencial, pero se transformaron en instancias de organización popular para encauzar reivindicaciones colectivas. Algunos fueron efímeros; pero otros se desarrollaron en forma importante. Algunos buscaron modos de articulación entre sí generando instancias superiores de organización; otros se redujeron a sus reivindicaciones específicas, aislándose de la realidad política del momento. Algunos – a instancias de las ONGs que los patrocinaron o apoyaron – acentuaron el proceso de despolitización; otros fueron impulsados por partidos u organizaciones políticas, en la mayoría de los casos con fuerte componente clientelista. En todos los casos sin duda que este proceso vivido desde la resistencia al modelo neoliberal por los sectores populares contribuyó a mantener una práctica colectiva de participación, con mayor o menor protagonismo en la formulación de sus demandas o en la elaboración de sus propuestas. Más allá de estas consideraciones aquellas prácticas sociales generaron una cultura “oenegeista”, con énfasis en el autoabastecimiento y la autosuficiencia, equiparándose impropriadamente con la necesaria autonomía de la sociedad civil. Esta conducta derivó en aislamiento y una articulación restringida a los espacios propios o cercanos, con abandono de otros escenarios sociales. Hoy de algún modo persiste tanto en espacios de militancia social como

en movimientos que fueron surgiendo con reivindicaciones no coyunturales sino estratégicas, como las relacionadas a la tierra, al agua, medio ambiente, género, diversidad, pueblos originarios. Y perdura con la reivindicación de una autonomía, que sobrevalora lo propio y en la práctica no se integra al conjunto de la “sociedad civil”, que acumula reivindicaciones diversas y requiere de la política para avanzar en respuestas. No se trata de proponer un involucramiento que restrinja la autonomía. Pero no se saldrá del círculo insuficiente del reclamo, si no se lo rompe para establecer el diálogo sobre las propuestas; que de todos modos probablemente no sean ejecutadas si no se avanza en otras formas concretas de involucramiento, que pueden llegar hasta la cogestión o la responsabilidad de la gestión estatal, alertados siempre del evidente riesgo de la cooptación.

Una sociedad civil integrada

El movimiento obrero organizado, en ese período, se desentendió de esta situación. La CGT, los sindicatos en general debilitados en afiliados por el embate de la desocupación y las privatizaciones, mantuvieron - y sus dirigentes en muchos casos fortalecieron - sus aparatos participando del modelo neoliberal (gerenciamiento de las obras sociales, privatización del sistema previsional, régimen de pro-

piedad participada en las privatizaciones, etc..-). El nacimiento de la CTA, como articulación de los trabajadores desocupados, ocupados y movimientos sociales, fue el principal esfuerzo organizativo desde el movimiento obrero. Recogía de este modo la mejor tradición de referencia social y política para otros sectores populares, ejercida en períodos anteriores de resistencia, como en 1968 por la CGT de los Argentinos.

Los movimientos de derechos humanos, varios de ellos surgidos antes y durante la dictadura militar, cumplieron un rol fundamental al incorporar la temática de los derechos humanos a la realidad y al discurso político. Su perspectiva inicial, en función de la gravedad de las violaciones sufridas, estuvo restringida a los derechos individuales de la vida y la libertad. Sin embargo la magnitud de las violaciones y el carácter de las víctimas - militantes políticos -, contribuyó a ir ampliando el horizonte, encarnando los casos individuales en los contextos sociales y políticos de los que provenían. Estamos hoy en un momento en el que es posible incorporar **la visión integral e integradora de los derechos humanos**, tal como lo hemos procurado hacer desde la gestión del Estado municipal en Córdoba desde 2003 al 2011. Esto se pudo lograr por la perspectiva política con la que abordamos la problemática de los derechos humanos.

Uno de los ejes fundamentales fue justamente haber insistido en el carácter político del conflicto social, que estuvo en la base de la implementación del terrorismo de estado, evitando – entre otras cosas – reducir el problema a un enfrentamiento entre dos bandos, como dos demonios, no integrados en el seno de una sociedad. Pero también el lento aunque sostenido proceso de recuperación del Estado en un rol activo hacia los sectores populares, ha posibilitado la implementación de políticas estatales de contenido popular en salud, vivienda, transporte, educación, asistencia social.

En la relación dialéctica del **estado y los movimientos sociales** se produce el avance en conciencia y sensibilidad de mayores derechos por una parte; y la multiplicación de las demandas al estado, como consecuencia de lo primero. Esta mayor visibilización de los derechos, producto de ese proceso, tiene relación con los avances en memoria, verdad y justicia sobre las violaciones producidas por el terrorismo de estado para implementar con impunidad el modelo neoliberal. Aquí es donde se juntan el ayer y hoy. El reclamo de justicia por los delitos de lesa humanidad se relaciona con las demandas de seguridad y la necesidad de un presente sin impunidad con los delitos. También con el cambio de paradigma en cuanto al rol coercitivo de un estado sin autoritarismo ni

violencia: de represivo a preventivo. El Estado que proponemos sólo podrá ser respetuoso de los derechos humanos, si además de asumir las demandas de los sectores populares como políticas de estado, diseña e implementa instituciones de participación para resolver los conflictos más graves. Pero también el protagonismo de las organizaciones populares en la decisión sobre las prioridades políticas para una real ciudadanía. Las planificaciones de las políticas sociales en función de esas prioridades deben establecerse como políticas de estado y ser asumidas como tales por las distintas áreas de gobierno. Implica toma de conciencia y sensibilidad por parte de los funcionarios. Esa será una garantía de ejecución no sólo para los beneficiarios directos, sino para que los movimientos no se eternicen en el reclamo. En este sentido los movimientos sociales deben despojarse de los prejuicios acumulados durante la hegemonía de las políticas neoliberales, que demonizó intencionalmente las instituciones del estado; e involucrarse en un diálogo sincero, sin perder su autonomía, para que las demandas se transformen en políticas concretas que satisfagan las necesidades de los empobrecidos.

Este largo proceso de resistencia, con el surgimiento de estas políticas parciales y sus expresiones organizativas, permitió la valorización de

la “**sociedad civil**”. Con ello se jerarquizó el concepto de **ciudadanía** y la sensibilidad sobre tantos derechos negados por el neoliberalismo. Las organizaciones y movimientos que emergieron asumiendo reivindicaciones específicas sobre estos derechos, de algún modo se establecieron como expresiones de esas carencias de ciudadanía – “el derecho a tener derechos” – de la sociedad civil. Fue una manera de hacerle un lugar en el análisis a lo que eran los sectores populares y mayoritarios de la sociedad. Lo más próximo a lo que se entendía genéricamente por “pueblo”. Sin embargo hay que anotar que el discurso de la “sociedad civil” apareció con un fuerte sesgo de contraposición a la “sociedad política”, a lo estatal. Lo opuesto también a los grupos del poder establecido, a los sectores económicos dominantes y a las instituciones estatales en manos de esos mismos sectores. Pero ese avance social de algunos sectores populares apoyados por ONGs, autoidentificados como “sociedad civil”, no tuvo un correlato organizativo generalizado. Lo favorable de esta nueva realidad mostró su limitación porque las mayorías empobrecidas de la sociedad civil no encontraron formas concretas de expresar las demandas de sus carencias. Siguieron sin poder decir su propia palabra, aunque a veces otros hablaran por ellos. En definitiva, la nueva realidad con la existencia de

“...los movimientos sociales deben despojarse de los prejuicios acumulados durante la hegemonía de las políticas neoliberales, que demonizó intencionalmente las instituciones del estado; e involucrarse en un diálogo sincero, sin perder su autonomía, para que las demandas se transformen en políticas concretas que satisfagan las necesidades de los empobrecidos.”

estos nuevos movimientos sociales no pudo superar la fragmentación social impuesta por el modelo neoliberal, aunque si se inició un proceso de superación del individualismo, favoreciendo las prácticas solidarias. Se contribuyó a redescubrir el valor de la organización y de lo comunitario. Además estos movimientos sociales que en nuestro país expresaron demandas parciales y dieron cauce organizativo a una porción de ciudadanos, hicieron visible y aportaron a instalar la problemática ante el resto de la sociedad. Es evidente que resultaron insuficientes para abarcar a las mayorías desorganizadas de necesitados; y develaron una limitación estructural, y quizás o sin quizás, también conceptual para integrar e integrarse al conjunto social. En las

consideraciones sobre estos fenómenos es preciso valorar los aportes en su período de auge, y también señalar sus limitaciones. Así podrán emerger prácticas sociales y políticas para el fortalecimiento organizado de los sectores populares que deben protagonizar los urgentes, imprescindibles y necesarios cambios que erradiquen sus actuales situaciones de injusticias.

Otra vez la política

Aquí es donde aparece **el rol de la política**. Corresponde a la política explicitar desde las instituciones estatales que las sociedades han ido creando en su historia, los mecanismos necesarios para establecer y ejecutar medidas para la convivencia armónica y respetuosa de la dignidad igualitaria de los ciudadanos. Pero la política ha sido manoseada, descreditada, aprovechada por dirigentes y grupos inescrupulosos, que han delinquido en la corrupción y han vaciado lo que debiera ser el instrumento principal de participación popular. A pesar de ese largo proceso, el desmoronamiento de las sagradas verdades neoliberales con las violentas crisis del 2001, posibilitó la reaparición de políticas que se creían sepultadas. La nueva reivindicación del rol del estado como principal articulador social para garantizar la justicia social y otras decisiones políticas tomadas con sentido favorable a los intereses de

las mayorías populares, no vinieron caídas del cielo. Se comenzaron a ejecutar luego de procesos electorales imbuidos de los vicios de la vieja política. El reclamo de “que se vayan todos” (atrás del cual algunos veían ya “los nuevos cielos”), en la realidad se transformó en la llegada de los que siempre estuvieron, pero obligados esta vez por el hastío popular a prestar atención y en gran parte responder favorablemente a algunos cambios de los que se reclamaban. Esa fue la virtud de algunos procesos iniciados en el 2003, a nivel nacional y local, que también recogían los vientos en el mismo sentido de otras latitudes latinoamericanas. La **política se revalorizó** como instrumento útil para mejorar la calidad de vida, hacia la consolidación de una democracia con justicia social, que alienta a la participación activa en las diferentes instancias que se generan y al protagonismo en la toma de decisiones de aspectos que tienen que ver con la calidad de la ciudadanía. Revalorización que no se evidencia como resultado de una construcción política desde las organizaciones sociales, sino por las políticas instrumentadas desde el estado a favor de los sectores populares.

Las **dirigencias políticas** que pusieron atención a estas realidades no surgieron de un pollito. Pertenecían y en muchos casos todavía pertenecen a las mismas viejas estructuras

políticas por las cuales en otras épocas llegaron los dirigentes ejecutores de las políticas neoliberales. No es este el espacio para hacer un rastreo de las causas de las contradicciones instaladas en nuestro sistema político. Sin ánimo de simplificar la complejidad del proceso histórico sobre este aspecto, y mirándolo desde los intereses de las mayorías, hay que decir que se verifica una participación política más entusiasta y con la novedad de la incorporación de una porción considerable de jóvenes, que no es todavía un fenómeno masivo. Al decir participación “más entusiasta” en realidad queremos acentuar que las mayorías silenciosas nunca dejaron de participar en los procesos electorales, por más que cargaran muchos vicios agigantados en los años neoliberales, al punto de provocar una esquizofrénica situación de rechazo y aprovechamiento. En general una participación pasiva y con el predominio de criterios clientelares, porque sin duda que las conductas y los sentimientos fueron afectados por la cultura neoliberal. De todos modos los sectores populares que reaccionaron contra esta práctica política de determinados dirigentes, en realidad no lo hicieron para negar la validez de la política ni la necesidad del estado; sino para reclamarles respuestas a sus necesidades, lo que implicaba un cuestionamiento a las orientaciones de acumulación excluyente y a la dirigencia que le era ser-

vil, gracias a su coparticipación en elevadas cuotas de corrupción. El “roba pero hace” que sirvió y sirve aún para justificar el enriquecimiento ilícito tanto de políticos y empresarios como burócratas sindicales, va dando paso a la exigencia de mayor transparencia en las conductas públicas. En el “mientras tanto” se vivencian procesos complejos y contradictorios, ninguno en estado virginal, porque sin duda que el escenario de las disputas políticas no está instalado en el templo de las vestales.

A través de **viejas estructuras políticas**, que alientan la participación sólo en las formalidades electorales (fiscalización, propaganda, movilizaciones, etc.), se expresa un interés y un comportamiento popular participativo. También en los **armados electorales**, que no llegan aún a transformarse en **nuevas construcciones políticas** sólidas, duraderas y participativas. En la realidad, si se analiza el comportamiento de los partidos tradicionales en las elecciones de las últimas décadas es fácil detectar la cooptación neoliberal, también en las políticas aplicadas cuando han sido gobierno. Fueron abandonadas muchas de sus tradiciones, banderas, reivindicaciones de sus líderes más memorables y en general de buena parte de la tradicional liturgia política de otros tiempos. El caso más patético lo tuvimos en Córdoba en 1999, cuando

“...existe una comprensión básica y fundamental acerca de la importancia de la política como herramienta integradora de las reivindicaciones sectoriales y canal propicio para acercarse a las soluciones reclamadas para una calidad de vida digna.”

el candidato De la Sota, del justicialismo, abandonó todos sus símbolos partidarios y se presentó como “Unión de Fuerzas Sociales” (aunque sus miembros eran partidos políticos). “Fuerzas”, no “partidos”; “sociales, no “políticos”. Adoptando además una liturgia propia de elecciones norteamericanas. El vaciamiento de los partidos políticos mayoritarios (justicialismo y radicalismo) y su consecuente fragmentación acrecentó la práctica de alianzas o frentes, en armados electorales frágiles y funcionales a cada elección. Sin duda, una manifestación de la crisis de representación política que aún no logra superarse en construcciones de nuevas identidades.

La aparición de algunos liderazgos como el de Luis Juez en Córdoba y la presidenta Cristina Fernández de Kirchner a nivel nacional parecieran

ser embriones que podrían alumbrar en nuevas identidades. Si estas manifestaciones se consolidan en el tiempo, puede esperarse una mejor calidad en las herramientas de participación política, hasta lograr que sean estructuras por donde la ciudadanía canaliza, debate y elabora propuestas en torno a sus demandas, afianzando allí nuevas identidades. Es este un desafío urgente pero que requiere inevitablemente un proceso de práctica y maduración, porque simultáneamente debe construirse una nueva cultura política, que es conciencia y sensibilidad, capaz de revertir la impuesta por tantos años de hegemonía neoliberal. La práctica política de las mayorías populares, con las limitaciones expuestas y otros vicios acumulados, señalan que a pesar de esto existe una comprensión básica y fundamental acerca de la importancia de la política como herramienta integradora de las reivindicaciones sectoriales y canal propicio para acercarse a las soluciones reclamadas para una calidad de vida digna. La superación de los vicios, que implica establecer una práctica diferente de todos los actores políticos – pueblo y dirigentes -, exige la creación de múltiples ámbitos de debate y formación política. Contribuirán a modificar la cultura política si cuentan con el impulso generoso de dirigentes convencidos que es fundamental para el crecimiento en ciudadanía. ■■